

C.A. de Santiago

Santiago, seis de julio de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don **Alfred Scheel Bastías**, abogado, en representación de **Olivos del Sur S.A.**, ambos domiciliados para estos efectos en Av. Las Condes N°11281, oficina 1002, torre C, comuna de Las Condes quien interpone reclamo de ilegalidad en contra de la **Ilustre Municipalidad de Las Condes**, representada por su Alcalde don **Joaquín Lavín Infante**, domiciliado en Av. Apoquindo N°3400, comuna de Las Condes, por el **Oficio N°168** de 26 de agosto de 2020 emanado del Departamento de Patentes Municipales de la Dirección de Administración y Finanzas de dicha municipalidad, mediante el cual se rechaza la rebaja de patente municipal solicitada, sin cumplir con los requisitos de validez de todo acto administrativo, ni con las normas sobre patentes municipales.

Pide se deje sin efecto el Oficio N°168, de 26 de agosto de 2020, y se ordene a la reclamada dictar el correspondiente acto de reemplazo que acoja la solicitud de declaración de rebaja de patente municipal por realización de actividades primarias de la sociedad Olivos del Sur S.A. por el Año Tributario 2020, en la parte exenta del mencionado tributo, en la proporción que correspondiere, oficiando a los Municipios de Coquimbo y la Estrella, para efectos de aplicar la rebaja correspondiente, considerando las sucursales que se encuentran en dicha jurisdicción.

Funda su pretensión señalando que el 4 de junio de 2020 Olivos del Sur S.A. presentó una solicitud de rebaja de patente municipal del Año Tributario 2020, ante el jefe del Departamento de Patentes Municipales de la I. Municipalidad de Las Condes y que al conocer de esta solicitud, la autoridad administrativa emitió el Oficio N°168 de 26 de agosto de 2020, que contiene un total de tres párrafos, dos de los cuales se refieren a la decisión sobre la solicitud, sin exponer los fundamentos o motivos que lo justifiquen.



Señala que el 2 de octubre de 2020 interpuso reclamo de ilegalidad ante la Ilustre Municipalidad de las Condes, sin embargo, transcurrido el plazo de 15 días hábiles contados desde la presentación de dicho reclamo, sin pronunciamiento por la autoridad edilicia, la acción se entiende rechazada por el solo ministerio de la ley, hecho certificado el 22 de octubre pasado.

Sostiene que la resolución Oficio N°168 de 26 de agosto de 2020 indica que la recurrente no tiene derecho a la rebaja de la patente municipal solicitada sin justificar de manera adecuada el acto administrativo, vulnerando los artículos 11, 16 y 41 de la Ley N°19.880, ya que toda decisión adoptada por la Administración del Estado y que se encuentre dentro del concepto de acto administrativo del artículo 3° de la Ley N°19.880, debe cumplir con los requisitos que permitan afirmar su validez.

Señala que el D.F.L. N°1, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 17 de noviembre de 2001, que fija el texto refundido, coordinado, y sistematizado de la Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dispone en su artículo 13 inciso segundo, que: *“La función pública se ejercerá con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella”*. Cita, además, los artículos 11 inciso 2°, 16 y 41 inciso 4° de la Ley N°19.880 en relación con el deber de fundamentación, lo que se cumple al contener una completa expresión de los fundamentos de hecho y de derecho que llevan a tomar una determinada decisión. Al efecto reproduce una sentencia de esta Corte dictada en la causa rol N°8273-2007 y de la Excma. Corte Suprema, en causa rol 6345-2015.

Expresa que la municipalidad de Las Condes, como órgano de la administración del Estado, se encuentra legalmente obligada a fundamentar sus decisiones, incorporando todos los razonamientos que sean necesarios para la acertada inteligencia y cabal comprensión de los actos administrativos que emita, los que deben ser dados a conocer



al administrado, siendo necesaria su expresión clara y precisa en el acto que emana de su autoridad, para inhibir la excesiva discrecionalidad con que puede actuar la Administración, requisito que no se obtiene con uso de meras formulas convencionales.

Explica que la debida fundamentación del acto administrativo se encuentra ligado al debido proceso, para efectos de que el administrado tenga la oportunidad de defenderse adecuadamente y logre una comprensión cabal de aquello que le es imputado o exigido por el Estado.

Refiere que de la lectura del acto impugnado se advierte que no es válido, al haberse omitido el trascendente requisito de fundamentación; el Oficio se limita a señalar que se rechaza la petición de la compañía por cumplirse los requisitos copulativos del artículo 3° del Decreto Supremo N°484 de 1980 del Ministerio del Interior, sin indicar de qué forma supuestamente se cumplirían estos requisitos, prescindiendo totalmente del análisis de los fundamentos de hecho de todo acto administrativo.

Además, el acto señala que la decisión se ajustaría a la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, sin siquiera citar lo pertinente o indicar los datos del dictamen, que hubiesen permitido entender la fundamentación de la decisión, cuestión que a todas luces resulta claramente improcedente.

Concluye que el Departamento de Patentes Municipales omite indicar los hechos que razonablemente lo llevaron a emitir la decisión contenida en el Oficio N°168 y cómo ellos se ajustan al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3° del Decreto Supremo N°484, siendo su fundamento la enunciación de una norma jurídica, incumpliendo con la precisión necesaria que permita comprender la argumentación sostenida por el Departamento de Patentes Municipales de la I. Municipalidad de Las Condes, vulnerando los artículos 11, 16 y 41 de la Ley de Procedimientos Administrativos y el artículo 13 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.



En relación con la normativa de las patentes comerciales, estima infringidos los artículos 4° y 5° del Decreto N°484 de 1980, precisando que la actividad principal de Olivos del Sur S.A. consiste en la compraventa, arrendamiento y explotación de predios rurales, así como la comercialización, distribución, exportación e importación de productos agrícolas, agroindustriales y forestales; y la comercialización, distribución de insumos y materias primas susceptible de ser extraídas de la tierra. Asimismo, desarrolla diversas actividades de inversiones en instrumentos financieros tanto en Chile como en el extranjero.

Indica que el 15 de diciembre de 2004 la Sociedad inició actividades en el Servicio de Impuestos Internos, declarando entre sus giros los códigos que se mantienen hasta hoy: - 012700 Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas. - 014410 Cría de ovejas (ovinos). - 016100 Actividades de apoyo a la agricultura. - 463019 Venta al por mayor de huevos, lácteos, abarrotos y de otros alimentos n.c.p. - 463020 Venta al por mayor de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. - 643000 Fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similares.

Añade que la Compañía se mantiene enrolada en las comunas de Las Condes (Rol 291.462-K), Coquimbo (Rol 101149) y La Estrella (Rol 2129), manteniendo al día los pagos de patente, advirtiéndole que realiza de manera conjunta actividades primarias no afectas al pago de patente municipal y actividades afectas a dicho tributo, particularmente, la actividad de cultivo y producción de olivos en los predios de las comunas de La Estrella y Coquimbo, que corresponde a una actividad primaria.

Cita los artículos 2° y 3° Decreto Ley N°484 en relación con el concepto de actividades primarias no afectas y gravadas, las que deben cumplir copulativamente con los siguientes requisitos: a) Que en la explotación medie algún proceso de elaboración de productos, aunque se trate de los exclusivamente provenientes del respectivo predio rústico, tales como aserraderos de maderas, labores de separación de escorias, moliendas o concentración de minerales, y b) Que tales productos elaborados se vendan directamente por los productores, en



locales, puestos, quioscos o en cualquiera otra forma que permita su expendio también directamente al público o a cualquier comprador en general, no obstante que se realice en el mismo predio, paraje o lugar de donde se extraen, y aunque no constituyan actos de comercio los que se ejecuten para efectuar ese expendio directo.”

Expone que la Contraloría General ha señalado que “(...) *para que se entienda gravada una determinada actividad económica primaria, ésta debe cumplir con los requisitos copulativos aludidos anteriormente, cuya constatación constituye una situación de hecho que deberá verificar la Administración activa, ya que los municipios sólo pueden cobrar patentes municipales en la medida que se encuentre acreditado el ejercicio efectivo de la actividad gravada, de manera que no procede que, simplemente, se presuma tal ejercicio. En ese contexto, cabe señalar que si un contribuyente ejecuta tanto actividades gravadas como aquellas que no lo están, de conformidad con el artículo 4° del citado decreto N°484, de 1980, del Ministerio del Interior, el valor de la patente municipal deberá calcularse sobre el capital propio destinado a la actividad afecta, debiendo deducirse la parte que corresponda a aquellas que se encuentren exentas, circunstancia que debe ser acreditada fehacientemente por los municipios a través de sus procesos de fiscalización y de los documentos e información que se les acompañe (aplica criterio contenido, entre otros, en los dictámenes N°s. 59.544 de 2007 y 33.063, de 2010)*”.

Puntualiza que la Contraloría establece que no basta con la mera presunción de cumplimiento de los requisitos del artículo 3° del Decreto Ley N°484 para efectos gravar una actividad económica primaria, como lo pretende hacer la municipalidad en el Oficio impugnado, que pareciera presumir el cumplimiento de los mismos, toda vez que no destina párrafo alguno a analizar los fundamentos de hecho que lo llevaron a arribar a dicha conclusión.

Hace presente que, en el procedimiento de fiscalización tuvo una conducta proactiva respecto a la presentación de toda la documentación necesaria para que la administración pudiera determinar el monto de



Capital Propio Tributario efectivamente afecto al pago de patente municipal, razón por la cual eran profusos los antecedentes de hecho que se debieron haber considerado en del Oficio N°168, que habría llevado a la municipalidad, a tomar justamente la decisión contraria.

Indica que lo anterior ha producido un grave perjuicio para Olivos del Sur S.A., quien debe pagar por concepto de patente municipal un monto ostensiblemente mayor al que se devengaría si la administración hubiera considerado la documentación acompañada en su mérito, vulnerando los artículos 4° y 5° del Decreto N°484 de 1980.

Afirma que en el periodo tributario 2020, las inversiones y gastos realizados por la Compañía sobre estos predios fueron los que indica en su reclamación por conceptos de insumos, correspondientes en general a mano de obra arriendo de equipos, reparaciones de maquinaria, gastos generales, depreciación, impulsión de bobas herramientas, tractores, plantación, entre otros, cuentas relacionadas directamente con las actividades primarias desarrolladas por la compañía que ascienden a \$19.557.735.960.

Expone que producto de una distribución proporcional entre activos afectos y no afectos, la actividad primaria efectuada por Olivos del Sur, equivale aproximadamente a un 33,2% del CPT total, para efectos municipales, razón por la cual corresponde deducir la suma antes referida a la parte gravada con el referido tributo.

Concluye que al tomar en cuenta que el CPT de Olivos del Sur S.A. correspondiente al AT tributario 2020 asciende a \$59.774.852.114, la Base Imponible de la patente municipal se calcularía según el siguiente detalle: CPT Total \$59.774.852.114, CPT actividades primarias \$19.557.735.960, CPT afecto a patente municipal \$40.217.116.154.

Segundo: Que evacua el informe requerido don **Rogelio Erazo Román**, Abogado en representación de la **Municipalidad de Las Condes**, quien solicita el rechazo del reclamo de ilegalidad, con costas.

Funda sus alegaciones señalando que mediante escritura pública de 25 de octubre de 2004, se constituyó Valle de Olivos S.A., cuyo objeto social es “a) la compra, venta, arrendamiento y explotación, por



cuenta propia o ajena, de toda clase de predios rurales, sean de aptitud agrícola, forestal u otra; b) la comercialización, distribución, explotación e importación, por cuenta propia o ajena, de toda clase de productos agrícolas, agroindustriales y forestales, así como de toda clase de insumos y materias primas susceptibles de ser extraídas de la tierra, y c) la participación en empresas y sociedades de cualquier naturaleza, cuya actividad principal diga relación con el giro enunciado en las letras precedentes, para lo cual podrá comprar y vender acciones de sociedades anónimas, y constituir, modificar, transformar, dividir, absorber, fusionar y disolver toda clase de sociedades.”. Un extracto de esta escritura pública se inscribió en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 34.199, número 25.541 del año 2004 y se publicó en el Diario Oficial el 29 de octubre de 2004.

Agrega que posteriormente, según da cuenta el Acta de la Tercera Junta Extraordinaria de Accionistas de 30 de octubre de 2006, reducida a escritura pública el 17 de noviembre de 2006, los socios de Valle de Olivos S.A. acordaron modificar la razón social reemplazándola por Olivos del Sur S.A., la que se inscribió a fojas 48.861, N°34.904 en el Registro de Comercio de Santiago del año 2006.

Precisa que la sociedad ha sido objeto de varias modificaciones que en detalle consigna y que la reclamante registra como actividades económicas vigentes ante el Servicio de Impuestos Internos, las siguientes: En su Declaración de Impuestos a la Renta correspondiente al AT 2019, señaló como giro del negocio “Venta al por mayor de bebidas alcohólicas y no alcohólicas”. Actividades Código Categoría Afecta IVA cultivo de plantas con las que se preparan bebidas; Cría de Ovejas; Actividades de apoyo a la agricultura; venta al por mayor de huevos, lácteos, abarrotes y de otros alimentos; venta al por mayor de bebidas alcohólicas y no alcohólicas; fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similares.

Sostiene que el 29 de mayo de 2019, Olivos del Sur S.A., solicitó ante el Departamento de Patentes Municipales de la Municipalidad de Las Condes, Patente Comercial Definitiva para el inmueble ubicado en



Avenida Las Condes N°11.281, oficina 1002, Torre C, en calidad de Casa Matriz, la que se otorgó el 30 de mayo de 2019 mediante Resolución N°5914, asignándosele el Rol N°291462-K.

Expone que el 4 de junio de 2020 Olivos del Sur S.A. realizó una presentación al Departamento de Patentes Municipales de la Municipalidad de Las Condes, manifestando que realiza actividades primarias no afectas a patente municipal, por lo que solicita se declare una rebaja de este tributo.

Señala que para atender la solicitud, se visitó el sitio web de la empresa (www.olisur.com), que indica: “Olivos del Sur S.A. Olisur nace en el año 2005 y cuenta actualmente con 2.600 hectáreas propias, con una plantación de 1.500 hectáreas de olivos ubicada en San José de Marchigue, en el corazón del Valle de Colchagua, VI Región. Es el mayor productor en volumen de aceite de oliva en Chile y es también el mayor exportador nacional. El total de la plantación está dedicada a producir 100% aceite de oliva extra virgen, con más de 10 variedades de seleccionados olivos. Cuenta con una Almarza concebida bajo los más altos estándares tecnológicos y arquitectónicos, la cual está emplazada en el corazón de la plantación, lo que permite recibir el fruto en su punto ideal y poder transformarlo en el mejor de los aceites”. Asimismo, se visitó el link <https://www.youtube.com/watch?v=ITRnxhqi8Lo> en el cual se muestra un video ilustrativo del proceso de cosecha de las aceitunas hasta el embotellado del aceite, donde se indica en la descripción del video: *“Olisur es la mayor productora de Aceites de oliva extra virgen en Chile. Nuestras prácticas de producción sustentable y amigable con el medio ambiente hacen que ofrezcamos un producto inigualable, de gran frescura, muy baja acidez y ganador de varios concursos a nivel internacional. Nuestra presencia en mercados como Brasil, USA, Canadá y Japón, son testimonio de la gran calidad de nuestros aceites”*.

En relación con la presentación de 4 de junio de 2020, el Departamento de Patentes Municipales emitió el Oficio N° 168 de 26 de agosto de 2020, sin que adolezca del vicio imputado por el reclamante. Refiere que la suficiencia de la motivación del acto administrativo nada



tiene que ver con su extensión, pues una motivación breve que contenga un discurso justificativo adecuado respecto de la emisión del acto debe también ser considerada suficiente. Una motivación sucinta, pero suficientemente ilustrativa que permita comprender las razones jurídicas y fácticas que justificaron a la autoridad administrativa para resolver en un determinado sentido, ha de considerarse como completamente válida.

Estima que la supuesta ausencia de motivación expresa no significa falta de motivación per se, como un vicio, ya que si de la lectura del expediente administrativo o de la resolución pueden extraerse los fundamentos de hecho y de derecho tenidos en cuenta por la autoridad, no puede considerarse al acto administrativo viciado por inexistencia de motivación sólo porque ella no se encuentre reseñada en los Vistos.

Entiende que la motivación del acto administrativo es un requisito formal de la decisión administrativa final, y por ello, la omisión en los considerandos y los vistos de los preceptos legales aplicables y los presupuestos fácticos sobre los que se funda el acto, no hacen a éste anulable.

En cuanto a la infracción relacionada con las normas sobre patente municipal, cita el artículo 23 y el inciso 1° del artículo 24 del Decreto Ley N°3.063, haciendo presente que respecto de la actividad primaria de plantación o cultivo de productos agrícolas de la reclamante, tales especies se someten a un proceso de elaboración y posterior venta en los términos del artículo 3° del decreto N°484, de 1980, por lo que aquella pasa a constituir una actividad primaria gravada.

Destaca que la recurrente se dedica a la comercialización de aceite de oliva y no a la compraventa de aceitunas. En consecuencia, para que se entienda gravada una determinada actividad económica primaria, ésta debe cumplir con los siguientes requisitos copulativos: primero, que medie algún proceso de elaboración de productos y, segundo, que posteriormente éstos se vendan directamente por los productores, en los términos previstos en el inciso segundo del citado artículo 23, supuestos de hecho que se dan en el caso de marras, por lo



que no corresponde que este Municipio realice una rebaja de la patente municipal de Olivos del Sur S.A.

Concluye que la actuación de la reclamada no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que apegada a la Ley, por lo que nunca el cumplimiento de la Ley puede importar ilicitud para el órgano y/o el funcionario que adecua sus actos a las previsiones de aquélla. Destaca que la Municipalidad de Las Condes debe someter su acción al principio de la legalidad, debiendo sujetar sus actuaciones a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, en virtud de los artículos 6° y 7° de la mencionada Carta Fundamental.

Precisa que en este caso no se observa ni se entiende cómo puede ser calificado de ilegal el actuar de la reclamada, ya que actuó dentro de las claras atribuciones y obligaciones que el ordenamiento legal le confiere, lo que motiva que el Reclamo de Ilegalidad de autos deba ser rechazado.

Tercero: Que informa al tenor del recurso la Fiscal Judicial señora **Javiera González Sepúlveda**, quien luego de reproducir lo pertinente del acto impugnado, expuso que aparece con claridad la falta de fundamentación de que adolece el acto reclamado, ya que no se vislumbra el sustento fáctico que apoya la decisión adoptada. Únicamente se menciona una norma jurídica –artículo 3° del Decreto Supremo N°484, de 1980- lo que resulta, a su juicio, insuficiente para tener por cumplidas las exigencias de los artículos 16 y 41 de la Ley N°19.880, en aras del resguardo de la transparencia y publicidad que establece la necesaria motivación de las resoluciones o decisiones emitidas por la Administración, cuyo es el caso en que el ente edilicio ha debido emitir pronunciamiento acerca de una petición formulada en el área de su competencia.

Expresa que en la especie se advierte, como lo indica la reclamante, que se prescinde “... *de una relación lógica y razonable de los hechos que llevaron a la administración a aplicar dicho precepto.*”. Por otra parte, carece de asidero la alegación del Municipio recurrido en cuanto a que “... *exigir una motivación expresa en los casos en que ella*



se desprende de la lectura del expediente o del acto en particular resulta una actividad ociosa y sin ninguna utilidad real, que sólo sirve para hacer más engorrosa la actividad administrativa y retrasar el actuar de la Administración ...”, ya que la exigencia de fundamentación expresa se condice con los principios que inspiran el actuar de la Administración, en orden a conocer los motivos considerados por la autoridad para decidir en uno u otro sentido y, sin duda, ellos no se leen en el texto del Oficio reclamado. Además, a la natural exigencia de fundamentación de las decisiones, se une, en el caso, la circunstancia de tratarse de un asunto discutido y respecto al que el Municipio, sólo en esta sede, incorporó como antecedentes de hecho la percepción de ciertos videos o publicidad, ante los que la reclamante no ha tenido la oportunidad de controvertir o exponer sus alegaciones.

Concluye que al adolecer de falta de fundamentación y, en consecuencia, habiéndose actuado en contravención a las normas legales citadas por la informante, la Fiscalía informa favorablemente el reclamo de ilegalidad y es de opinión de acogerlo, salvo mejor parecer de esta Corte y, en consecuencia, dejar sin efecto el contenido del Oficio N°168, de 26 de agosto del año 2020, dictado por el Jefe del Departamento de Patentes Municipales de la I. Municipalidad de Las Condes, representada por su Alcalde, señor Joaquín Lavín Infante, disponiendo el pronunciamiento como en derecho corresponde en relación con la solicitud de rebaja de patente presentada por la reclamante.

Cuarto: Que el acto que por esta vía se reclama corresponde al Oficio N° 168 de 26 de agosto de 2020, suscrito por don Ricardo Cariola Martínez como Jefe del Departamento de Patentes de la Municipalidad de Las Condes, quien luego de exponer lo requerido por la empresa Olivos del Sur S.A., en solicitud presentada el 4 de junio del mismo año, señala *“Al respecto, cumpla con manifestar a Ud., que analizados los antecedentes adjuntos a su presentación, se pudo constatar que, se cumplen los requisitos copulativos señalados en el Art. 3 del Decreto Supremo n° 484 de 1980 del Ministerio del Interior”,* agregando que *“En*



consecuencia y en consideración a lo señalado, no es factible por parte del municipio acoger su solicitud de rebaja al capital año 2020, lo anterior se ajusta a lo señalado en el Decreto Supremo de 1980 del Ministerio del Interior y la jurisprudencia sobre la materia, emanada de la Contraloría General de la República”.

Quinto: Que en cuanto al primer vicio denunciado es dable considerar que la causa o motivación es un elemento de todo acto administrativo, el que debe ser entendido como la razón que justifica su dictación por la Administración del Estado, en la cual se encuentran elementos fácticos y de derecho.

La causa o motivo debe expresarse en el respectivo acto sin que baste para ello referencias genéricas o meras afirmaciones, por cuanto la exigencia legal es la explicitación formal de la fundamentación y ella debe comprender tanto los hechos como las razones jurídicas que llevan a su dictación a fin de posibilitar su correcta comprensión por parte de los destinatarios.

En esta materia la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos contempla esta exigencia de fundamentación al señalar en su artículo 11 que: *“Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”*, principio reiterado en sus artículos 16 y 41.

Por su parte el artículo 13 inciso segundo de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado dispone que *“la función pública se ejercerá con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella”*.

Sexto: Que del acto administrativo impugnado se observa la total carencia de hechos y fundamentos jurídicos que lo sustenten, por cuanto se limita -en términos genéricos- a afirmar el cumplimiento de los requisitos del artículo 3° del Decreto Supremo N° 458 de 1980 del



Ministerio del Interior, sin hacerse cargo de lo requerido por el solicitante, sin analizar los antecedentes acompañados por éste y sin exponer cuál es la jurisprudencia administrativa que dice avalaría sus afirmaciones, afectado los derechos del administrado por cuanto desconoce las razones que llevaron a decidir en tal sentido.

Séptimo: Que lo anterior lleva necesariamente a concluir la falta de motivación del acto administrativo impugnado, lo cual constituye un vicio que afecta su validez, pues la fundamentación exigida es un requisito esencial del mismo, afectando con ello los derechos del administrado en tanto ignora las razones que determinan la decisión adoptada y el motivo concreto del rechazo de sus planteamientos.

Octavo: Que en el presente caso, según ya se ha expuesto, la decisión municipal carece de fundamentos, sin que sea aceptable lo expuesto por la reclamada en su informe, desde que aun considerando que la extensión del acto no es relevante para el análisis de su contenido, en el caso de la especie el acto administrativo nada expresa ni en lo fáctico ni en lo jurídico; la motivación como elemento constitutivo del acto administrativo debe existir y además ser pertinente a lo requerido y adecuada a la finalidad pública que se persigue con su emisión.

Por otro lado, tampoco es procedente manifestar ahora que para la emisión del acto la Municipalidad procedió a revisar páginas web de la reclamante, en primer lugar por cuanto nada de ello se dice en la motivación del Oficio N° 168 y, en segundo término, porque la Municipalidad -de ser ello efectivo- produjo prueba al margen de la legalidad del procedimiento al no haberlas decretado y comunicado al interesado, a quien le asiste el derecho de exponer lo pertinente en defensa de sus derechos.

Noveno: Que a lo anterior se agrega artículo 37 de la Ley N°19.880, conforme al cual: *“Para los efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que señalen las disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la*



conveniencia de requerirlos". De acuerdo a lo que se viene razonando, si el reclamado estimaba necesario contar con mayores antecedentes debió requerirlos formalmente al solicitante, razón por la cual las supuestas diligencias que ahora dice haber practicado se alejan de la reglas del procedimiento y de la transparencia y publicidad que la Administración debe siempre respetar.

Décimo: Que, en consecuencia, habiéndose constatado la ilegalidad del acto reclamado y compartiendo lo expresado por la señora Fiscal Judicial en su dictamen, procede dejar sin efecto el acto administrativo para que la autoridad de que se trata cumpla con las exigencias de todo acto administrativo, pronunciándose nuevamente sobre lo requerido.

Undécimo: Que la vulneración antes anotada es suficiente para acoger la acción intentada, de modo que se hace innecesario el análisis detallado de las demás infracciones denunciadas.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuestos en el artículo 151 de la Ley N° 18.695 y artículos 11, 16 y 41 de la Ley N° 19.880 y 13° de la Ley 18.575, **se acoge**, sin costas, el reclamo de ilegalidad interpuesto por don Alfred Scheel Bastías en representación de la empresa **Olivos del Sur S.A.** en contra del Oficio N° 168 de 26 de agosto de 2020, emanado del Jefe del Departamento de Patentes(S) de la Municipalidad de Las Condes, **para el solo efecto de disponer que la autoridad emita un nuevo pronunciamiento** sobre lo requerido por la reclamante en su presentación de 4 de junio de 2020, esto es, la procedencia de rebajar de patente municipal comercial.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redactó la ministra señora González Troncoso.

N°Contencioso Administrativo-690-2020.





GZEVJTXSZ

Pronunciado por la Undécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Jessica De Lourdes Gonzalez T., Maria Loreto Gutierrez A., Jaime Balmaceda E. Santiago, seis de julio de dos mil veintiuno.

En Santiago, a seis de julio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

